

Representantes de algunos partidos se pronuncian a favor de la reestatización

## La mayoría de los políticos no da su voto a la privatización de las empresas

**SANDRA NOVOA**  
Privatizar es un verbo que en los últimos años el Gobierno ha conjugado en primera persona. Mientras tanto, la opinión pública polemiza y se divide entre quienes apoyan el

proceso, se muestran reticentes o definitivamente lo rechazan. Nadie permanece impasible, no sólo por el monto de los recursos involucrados sino también por el carácter de servicio público de algunas empresas. Es en

este punto donde muchos alzan la voz para advertir que los traspasos de algunas compañías dependientes de los ministerios a Corfo es sólo el preámbulo hacia un cambio de administración, hacia manos privadas.

Las críticas más fuertes provienen del espectro político, desde donde surgen acusaciones respecto de la forma de aplicar el sistema, el momento para hacerlo, la transparencia, los precios, la velocidad y los porcentajes puestos en venta.

Pero también preocupa el cómo operarán las empresas bajo la dirección de sus nuevos dueños, sobre todo las monopólicas, y quién se encargará de suplir el rol social.

Parece relevante, entonces, conocer cual sería el futuro de la privatización en un contexto democrático. Personalidades ligadas a las distintas tendencias manifestaron sus opiniones a título personal. Con mayores o menores matices, estas opiniones dejan entrever la postura de la colectividad a que pertenecen.

### El sentir de la derecha

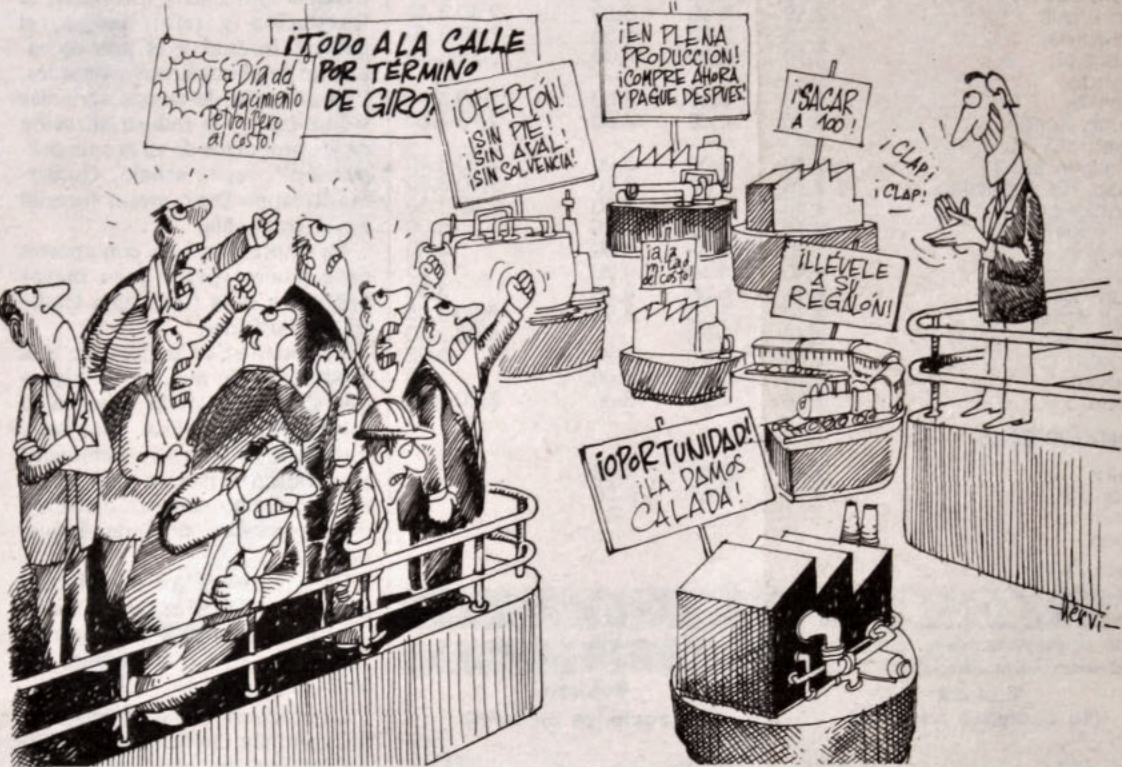
Desde la diestra de la vara ideológica de los chilenos Gonzalo Eguiguren, de Renovación Nacional, considera "muy conveniente" la privatización, pero advierte la importancia de cumplir con ciertos requisitos como la transparencia para que no se concentre la propiedad. "Ello, para no despertar recelos, conseguir una amplia aprobación, que se disperse la propiedad y que realmente el sistema contribuya al desarrollo".

Refiriéndose al futuro del proceso en el contexto de un nuevo gobierno, Eguiguren califica como "demencial" la idea de revertirlo: "Si se logran avances en materia de empleo y estándar de vida nadie tendría por qué estar en desacuerdo con el papel de los particulares en la economía".

Por otra parte, enfatiza que el Estado debe ser dueño de la gran minería, el petróleo y algunas empresas estratégicas, además de fiscalizar las actividades sin competir con los empresarios.

Para Ramón Luco, del Partido Nacional, "el traspaso de las grandes empresas debió realizarse en un régimen democrático y con aprobación del Congreso".

A su juicio, si bien la ola privatizadora ha tenido gran acogida en Europa y otros países industrializados, resulta prematuro para economías como la chilena: "No hay capitales ni conciencia como para traspasar empresas de



la magnitud de Ferrocarriles a particulares. Cualquier error puede traducirse en un costo enorme si después nos vemos obligados a reemplazarlas". Reitera que hoy no están dadas las condiciones para poner en práctica el sistema y que "debieron haber esperado hasta después del 89".

### Los matices del centro

"El asunto me parece grave desde un punto de vista político, jurídico o económico", explica Ramón Briones, presidente de la Comisión Nacional de Fiscalización de la Democracia Cristiana. Según el abogado, políticamente el proceso supone admitir la intervención de agentes externos "a través de los capitales transnacionales, que se valieron de resquicios jurídicos y económicamente han causado pérdidas al Estado cercanas a los 800 millones de dólares".

Argumenta que la ciudadanía tiene "el derecho de detener la privatización y buscar una fórmula justa para deshacer el entuerto. Un futuro Parlamento deberá revisar las ventas y exigir que se paguen los verdaderos precios o volver a estatizar, en algunos casos".

Ricardo Navarrete, secretario general de los radicales de Silva Cimma, señala que el tema resulta de especial interés para su partido "porque Corfo fue creada durante el mandato de Pedro Aguirre Cerda como impulsora de las empresas públicas". Asegura que con las políticas privatizadoras "se deteriora la producción interna, aumenta la dependencia externa y la pobreza nacional, y se desequilibran las relaciones de intercambio". También expresa que un régimen democrático "respetuoso de la iniciativa privada no puede dejar de lado el sistema de empresas mixtas y estatales que considera el objetivo de maximizar las utilidades, pero no olvida nuestra condición de país subdesarrollado y atiende los principios de solidaridad y consenso social".

### El coro de la izquierda

Por su parte Ricardo Lagos, del Partido Socialista (Núñez), cree que el traspaso de las empresas públicas requiere de una definición de los chilenos. "¿Por qué no se vendió al valor libro o al mismo precio en que se compró? Nadie puede pretender que es ético adquirir CAP en 114 millones de dólares, cuando tiene en caja

150 millones y una deuda avalada por el estado en 500 millones".

Lagos expresa que quienes confunden la defensa de la propiedad privada con la privatización, paradójicamente la están poniendo en peligro: "Los socialistas no vamos a reconocer derechos adquiridos. Cuando se compra por menos de la mitad del valor real, según Andrés Bello y el Código Civil, se lesiona a la sociedad".

En el extremo de la izquierda del quehacer político Andrés San Fuentes, del Partido Comunista, manifestó compartir los planteamientos del Comando de Defensa de las Empresas del Estado "porque la enajenación se realiza sin el consentimiento expreso de los chilenos. En el futuro democrático se cambiarán las bases económicas y sociales de la vida nacional, se reorganizarán las empresas estratégicas y se reorientarán sus funciones hacia las necesidades de los trabajadores y de las mayorías".

En síntesis nadie parece estar contento del todo con el proceso. Observaciones de forma y fondo, críticas fuertes y acusaciones graves convergen hacia una razón: la privatización debió conjugarse en plural.